

## EL SECRETO DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN PERIODÍSTICA EN LA ERA DE LAS REDES SOCIALES, LA VIGILANCIA *ONLINE* Y LOS ALGORITMOS

### *THE SECRECY OF JOURNALISTIC INFORMATION SOURCES IN THE ERA OF SOCIAL MEDIA, ONLINE SURVEILLANCE AND ALGORITHMS*

Investigadores USAL: Paredes, Graciela (graciela.paredes@usal.edu.ar); Larrondo, Manuel.  
Alumno practicante USAL: Rodríguez, Juan Miguel.

**Palabras clave:** Secreto periodístico; Vigilancia *online*; Libertad de expresión; Algoritmos; Redes sociales.

**Keywords:** *Journalistic Secrecy; Online Surveillance; Freedom of Expression; Algorithms; Social Media.*

#### **Resumen**

En esta investigación se analizan y estudian los aspectos jurídicos y comunicacionales de preservar el anonimato de la fuente de información periodística como garantía del ejercicio del derecho humano que lo envuelve, esto es, el de recibir, investigar y difundir información de conformidad con lo previsto por el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 10 del Tratado Europeo de Derechos Humanos y los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se observa que si bien la protección de la identidad de la fuente en algunos países está amparada por ley o bien se la contempla en códigos de ética, ello no impide que, en ciertas ocasiones, toda persona que ejerza ese derecho —y en particular las y los periodistas— pueda ser obligada judicial o administrativamente, o bien por sus empleadores, a identificar a sus fuentes de información. También puede encontrarse sujeta a una injerencia arbitraria en sus comunicaciones o vigilancia selectiva estatal o privada que redunde en que se pueda identificar a sus fuentes. A ello podría sumarse el padecer o enfrentar denuncias penales, sanciones preventivas y disciplinarias, e incluso hasta cumplir penas de prisión. En este contexto de avance tecnológico incesante, de interacción con plataformas virtuales y de uso de dispositivos electrónicos con conexión a Internet, voluntaria o involuntariamente, nuestra expectativa de mantener nuestra privacidad en las comunicaciones se encuentra reducida. Las preguntas que guían la investigación son: ¿Quién es periodista en el siglo xxi? ¿Quién es filtrador? ¿Quién es fuente? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del secreto de la información periodística? ¿Corresponde su protección absoluta o relativa? En la investigación se analiza la incidencia de la vigilancia masiva y selectiva en el ejercicio profesional del periodismo y en la protección legal a preservar la identidad de la fuente al difundir información de interés público. También se considera el rol de los intermediarios externos y la retención de datos y el derecho a la intimidad en las comunicaciones. Se considera, además, la incidencia de los algoritmos e inteligencia artificial en la vigilancia y el efecto “de la seguridad nacional/legislación antiterrorista”. La metodología utilizada consistió en el “método de casos”, que implica el estudio pormenorizado

de ciertos precedentes jurisprudenciales —nacionales y extranjeros—, resoluciones e informes dictados por organismos internacionales, así como también en realizar un relevamiento de documentos periodísticos e investigaciones académicas. En el trabajo se cumplieron los objetivos de identificar, cuantificar y analizar los fundamentos jurídicos y comunicacionales expuestos por sentencias judiciales nacionales y extranjeras, y resoluciones de organismos internacionales vinculados a los Derechos Humanos, en las que se ha resuelto la pertinencia o no de revelarse la identidad de la fuente. También se determinaron las distintas doctrinas jurídicas nacionales y extranjeras que esbozan una protección absoluta del anonimato de la fuente periodística y aquellas que, por el contrario, se muestran más permeables a una protección relativa dependiendo de eventuales razones de seguridad nacional, si quien lo invoca ejerce o no la profesión de periodista y, en particular, frente al rotundo avance del empleo de herramientas tecnológicas de parte de gobiernos y corporaciones. Finalmente, se compararon las opiniones de periodistas investigadores y de un funcionario fiscal acerca de las múltiples situaciones en las que se encuentra en juego la revelación o no de la identidad de las fuentes periodísticas. Se incluye también la revisión de una serie de entrevistas realizadas por diversos medios de comunicación a otros periodistas nacionales y extranjeros vinculadas a la temática.

Las conclusiones generales que arroja esta investigación son: 1) Que el ejercicio del derecho a recibir, investigar o difundir información no es exclusivo de ciertos oradores privilegiados, agencias de prensa, clases o subclases de personas que produzcan y distribuyan información, sino que al tratarse de un derecho humano, toda persona puede ejercerlo sin censura previa y, por ende, ejercer también el derecho de mantener la reserva de la fuente de información; 2) Que en la faz práctica resulta contradictorio que las autoridades estatales se inclinen por encarcelar o penalizar a quien se niegue a revelar la identidad de la fuente de información cuando, si realmente se configurara una posible afectación a la seguridad nacional, justamente quien difunde información de interés público podría ser considerado como un “aliado” del sistema democrático de gobierno; 3) Que los proveedores de servicios de Internet y compañías de telecomunicaciones no deberían estar obligadas a revelar información (contenido, datos y metadatos) que pueda conducir a la identificación de las fuentes de información de interés público; 4) Que las actividades de vigilancia masiva de parte de Agencias de Seguridad estatales o bien de empresas privadas de servicios de comunicaciones no solo implican una afectación al derecho a la intimidad de las personas, sino que además afectan a la gobernabilidad democrática y al derecho humano a la libertad de expresión. Por tal razón, debe reconocerse por ley su debida protección; 5) Finalmente, los Estados deben tender a reconocer y proteger por ley a los miembros más débiles del denominado cuarto estado, en razón de contar con menos visibilidad pública y con menos posibilidades de enfrentar la presión de los Gobiernos y empresas privadas intermediarias.

### **Abstract**

*In this research, legal and communicational aspects to preserve journalistic secrecy are analyzed and studied in order to guarantee a human right, i.e. the right to receive, research and transmit information according to what is provided by article 13 from the Pact of San José de Costa Rica, article 10 from the European Convention on Human Rights, and articles 18 and 19 from the International Covenant on Civil and Political Rights. Although source identity in some countries is either protected by law or is present in ethical codes, it does not prevent every person — especially journalists — who exercise this right from being legally or administratively forced to reveal the sources of information in certain situations. Furthermore, source identity protection can abide by either an arbitrary interference in their communications or by state or private surveillance, which means that sources can be identified. We can add the fact that people, under the circumstances described above, may have to face penal action,*

*preventative justice, and disciplinary measures or, even worse, they may go to prison. In this context of continuous technological advances, virtual interactions and the use of electronic devices with Internet connection, our expectations on keeping our privacy in communications — either voluntary or not — have diminished. The questions that guide the research are: Who works as a journalist in the 21st century? Who acts as a filter? Who acts as a source? What is the legal nature of journalistic secrecy? In this research, we analyze the influence of massive and selective surveillance in the professional exercise of journalism and in legal protection, for the sake of preserving the source identity at the moment of transmitting information of public interest. We also considered external intermediaries, withholding of data and right to privacy in communications. The influence of algorithms and artificial intelligence in surveillance as well as the effect of “national security/anti-terrorist legislation” are also taken into consideration. The methodology implemented consisted, on the one hand, of applying the “case method”, which implies a detailed study of certain legal precedents — domestic and foreign — resolutions and reports from international organizations, and, on the other hand, of collecting press documents and academic researches. In this piece of work, the following objectives were achieved: identifying, quantifying and analyzing the legal and communicational foundations presented by national and foreign legal sentences, and the resolutions of international organizations related to Human Rights, in which it was decided whether to reveal the source identity or not. We identified different national and foreign legal doctrines that show absolute protection of press source and those which, on the contrary, show a relative type of protection depending on possible national security reasons, if the one who invokes it is either a journalist or not, particularly facing the advances of technological tools used by governments and corporations. Finally, there was a comparison of opinions, given by journalists who do research and a public prosecutor, about the numerous situations in which there is a debate on whether to reveal or not the identity of press sources. We also include the revision of a series of interviews, via different means of communication, with other national and foreign journalists related to the topic. The general conclusions of this research are: 1) the exercise of the right of receiving, researching or transmitting information is not exclusive of certain privileged orators, press agencies, classes or subclasses of people who produce and distribute information. It is a human right, every person can exert this exercise without previous censorship, and consequently, he/she has the right to keep the source of information unrevealed; 2) it is contradictory, in the practical stage, that state authorities decide to imprison or penalize those who refuse to reveal the identity of the information source when, if there was a possibility of affecting national security, that person who transmits information of public interest could be regarded as an ally of the democratic government system; 3) internet service providers and telecommunication companies should not be forced to reveal information (such as content, data and metadata) that can lead to the identification of the information sources of public interest; 4) massive surveillance activities carried out by either state Security Agencies or private companies of communication services not only imply affecting the right to private life but also democratic governance and the human right to freedom of expression. This is the reason why protection should be recognized by law; 5) finally, the States should legally recognize and protect the weakest members of the so-called fourth state so as to have less public exposition and fewer possibilities to face the pressure of Governments and private intermediary companies.*